



Señores:

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BUGA. (REPARTO)

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE : ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI
DEMANDADO : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL.

CAROLINA PAZMIÑO TORRES, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.606.627, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional número 113.574 del C.S. de la J., en calidad de apoderada de la señora ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI, tal como consta en poder adjunto, por medio de este escrito de demanda en MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, contra la DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, representada legalmente por el señor Gobernador UBEIMAR DELGADO BLANDON, mayor de edad, vecino de Cali, o quien haga sus veces al momento de la notificación así:

1. DESIGNACION DE LAS PARTES.

1.1.DEMANDANTE:

ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI, mayor de edad, vecina de Bugalagrande, identificado con la cédula de ciudadanía número 31.498.231.

1.2.DEMANDADO:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, representada legalmente por el señor Gobernador UBEIMAR DELGADO BLANDON, mayor de edad, vecino de Cali, o quien haga sus veces al momento de la notificación.



1. DECLARACIONES

1.1. Declarar nulo el acto administrativo contenido en el oficio el COD-080.3.53-011823 de fecha 01 de octubre de 2004, proferido por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por medio del cual se niega la solicitud del pago de prima de servicio y bonificación por servicios prestados, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y las que se generen hacia el futuro, solicitud presentada el 08 de septiembre de 2014.

1.2. Que se declare que el señor ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI, por ser docente que labora en la Institución Educativa Diego Rengifo Salazar ubicado en el municipio de Bugalagrande y por ende al servicio del Departamento del Valle del Cauca, debe ordenarse el reconocimiento y pago de la prima de servicios y bonificación por servicios prestados, de conformidad con lo ordenado en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

2. CONDENAS

2.1. A título de restablecimiento se condene al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, representada legalmente por el señor Gobernador UBEIMAR DELGADO BLANDON, mayor de edad, vecino de Cali, o quien haga sus veces y solidariamente a:

2.1.1. Liquidar y pagar la Prima de Servicios de la señora ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI, establecida en el artículo 58 y siguientes del Decreto Nacional 1042 de 1978, de conformidad con el contenido del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y las que se generen hacia el futuro.



- 2.1.2. Liquidar y pagar la bonificación por servicios prestados a que tiene derecho la señora ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI, establecida en el Decreto Nacional 1042 de 1978, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y las que se generen hacia el futuro.
- 2.1.3. Se cancela la indexación de las sumas que saliere a deber la entidad la entidad nominadora para lo cual se deberá dar aplicación a la fórmula aceptada por el Consejo de Estado

$RH * INDICE FINAL$

$R = \frac{RH * INDICE FINAL}{INDICIE INICIAL}$

$INDICIE INICIAL$

Atendiendo a que son obligaciones de tracto sucesivo, la anterior fórmula se debe aplicar mes a mes. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago)

- 2.1.4. Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 192 del CPACA
- 2.1.5. La entidad demandada deberá cumplir con respecto a la sentencia con los artículos 189 y 195 del CPACA
- 2.1.6. Se condene en costas a las entidades demandadas de conformidad con el art. 188 del CAPACA.



3. HECHOS QUE SUSTENTAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

3.1. La demandante se encuentra vinculada al departamento del Valle del Cauca mediante resolución 2022 de 2006 de fecha 04 de agosto de 2006, por medio de la cual fue nombrada en propiedad como docente de la IE Diego Rengifo Salazar de Bugalagrade –Valle. En la actualidad la demandante se desempeña como docente de aula en el escalafón 2A en la misma institución.

3.2. La demandante realizó solicitud de pago de prima de servicios y bonificación por servicios prestados, el 08 de septiembre de 2014 a la entidad demandada, de conformidad con artículo 58 y siguientes del Decreto Nacional 1042 de 1978, y con el contenido del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994.

3.3. La solicitud fue resuelta mediante el oficio COD- 080.3.53-011823 de fecha 01 de octubre de 2014, en dicho acto administrativo la administración departamental negó el pago argumentando que “ ..., resulta claro entonces que la excepción contemplada en el literal b del Decreto 1042 de 1978, está vigente y no ha sido derogada por la Ley 91 de 1989 pues la misma resulta justificable en la medida en que la figura de docente, dentro de estructura nacional, (sic) se proyecta en la existencia de un régimen especial que establece una regulación diferente para el gremio, quedando así establecido en los articulo (sic) 2 y 115 de la Ley 115 de 1994. ...

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los mismo (sic) argumentos anteriores son suficientes para sustentar la respuesta a su solicitud elevada respecto a la bonificación y prima de servicios, se le comunica, que no es posible acceder a su solicitud.”

3.4. Como se puede observar el Departamento del Valle niega el reconocimiento y pago de bonificación por servicios prestados y la prima argumentando que no existe norma que sustente el pago, esto sin tener en cuenta que de conformidad con la Ley 91 de 1989, que esta prestación



económica quedará a cargo de la entidad nominadora, pues se recuerda que por esta última se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y además en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989: “Parágrafo 2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: **Primas** de navidad, **de servicios** y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones.”

3.5. Correspondió por reparto la solicitud de conciliación a la Procuraduría 60 Judicial I para Asuntos Administrativos, audiencia que se celebró el día 05 de marzo de 2015, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las entidades demandadas. Dándose por agotado el requisito de procedibilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

- Art. 3 y 6 de la ley 60 de 1993.

CAPITULO I

Distribución de competencias

ARTICULO 3o. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas.

ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales. Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial



adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

- Artículo 115 de la ley 115 de 1994.

CAPITULO 3°

Carrera docente

ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales.

En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores.

- Artículo 15 Ley 91 de 1989. Parágrafo 2.



Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

Parágrafo 2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones.

- Decreto Nacional 1850 de 2002. Art. 9, 10 y 11.

CAPITULO III

Jornada laboral de docentes y directivos docentes

Artículo 9°. Jornada laboral de los docentes. Es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de la asignación académica; a la ejecución de actividades curriculares complementarias tales como la administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; la evaluación, la calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos; las reuniones de profesores generales o por área; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la atención de la comunidad, en especial de los padres de familia; las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación; actividades de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo institucional; y actividades de planeación y evaluación institucional.

Artículo 10. Jornada laboral de los directivos docentes de las instituciones educativas. Es el tiempo que dedican al cumplimiento de las funciones propias de dirección, planeación, programación, organización, coordinación, orientación, seguimiento y evaluación de las actividades de los establecimientos educativos.



Artículo 11. Cumplimiento de la jornada laboral. Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho (8) horas diarias.

- Art.6, Ley 715 de 2001.

TITULO II

SECTOR EDUCACION

CAPITULO II

Competencias de las entidades territoriales

Artículo 6°. Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:

6.1. Competencias Generales.

6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar.

6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información educativa departamental y suministrar la información a la Nación en las condiciones que se requiera.

6.1.3. Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen en los términos previstos en la presente ley.

6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos del Sistema General de Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el departamento no lo certifica, podrá solicitarla a la Nación.

6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.

6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.



6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley. 6.2.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará docentes entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.

6.2.4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.

6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.

6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes directivos, de conformidad con las normas vigentes.

6.2.7. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.

6.2.8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas, cuando a ello haya lugar.

6.2.9. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad.

6.2.10. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de conformidad con el reglamento.

6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia.

6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción.



6.2.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros en los establecimientos educativos.

6.2.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.22.

6.2.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

Algunas de estas competencias, salvo la de nominación y traslado de personal entre municipios, se podrá delegar en los municipios no certificados que cumplan con los parámetros establecidos por la Nación.

- Decreto 1042 de 1978

“Artículo 1º.-Del campo de aplicación. El sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos que se establece en el presente Decreto regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, con las excepciones que se establecen más adelante.”

Artículo 58º.- La prima de servicio. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.

Esta prima no se regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre..

...

Artículo 59º.- De la base para liquidar la prima de servicio. La prima a que se refiere el artículo anterior se liquidará sobre los factores de salario que se determinan a continuación:

- a) El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo.
- b) Los incrementos salariales por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto.
- c) Los gastos de representación.



d) Los auxilios de alimentación y transporte.

e) La bonificación por servicios prestados.

Para liquidar la prima de servicio, se tendrá en cuenta la cuantía de los factores señalados en los ordinales precedentes a 30 de junio de cada año.”

...

Artículo 60°.- Del pago proporcional de la prima de servicio. Cuando el funcionario no haya trabajado el año completo en la misma entidad tendrá derecho al pago proporcional de la prima, en razón de una doceava parte por cada mes completo de labor y siempre que hubiere servido en el organismo por lo menos un semestre...”

CONCEPTO DE LA VIOLACION

INAPLICACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL: La entidad demandada incurrió en ésta, al no dar aplicación al parágrafo 2° del artículo 15 de la ley 91 de 1989, pues si bien el mismo señala que las acreencias laborales quedarían a cargo de la Nación, para el pago de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, debía interpretarse las reglas de competencia establecidas en la Ley 715 de 2000, que asignaron la administración de la educación a los entes territoriales y al ser la demandante la señora ALBA NELLY SALDARRIAGA YUSTI, una empleada público del orden territorial tal obligación estaría en cabeza del Departamento del Valle aunque la misma niega la solicitud de pago y motiva el acto administrativo sin tener en cuenta el parágrafo 2 del art. 15 de ley 91 del 89 en el caso que se le solicita.

DERECHO DE IGUALDAD : La entidad demandada violaron el derecho a la igualdad, establecido en el art.13 de la Constitución Política, en razón a que desconocen el régimen prestacional docente aplicable a todos los educadores tanto nacionales como nacionalizados y de orden territorial, pese a que en reiterada jurisprudencia se ha sostenido que a la entidad nominadora (Departamento del Valle) es quien corresponde el pago de la prima de servicios y el pago de la bonificación por servicios prestados. El acto administrativo de manera flagrante atenta contra el derecho de igualdad, pues la prestación económica



es reclamada por otros trabajadores de la entidad pero de manera caprichosa niega el reconocimiento argumentando que por ser el demandante docente con régimen especial no tiene derecho a la prestación económica.

VIOLACION DIRECTA AL ESTATUTO DEL TRABAJO: La entidad demanda incurre en la violación del Art 53 Constitucional que garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales pues la entidad niega el reconocimiento prestacional del demandante desconociendo los derechos laborales adquiridos. Además debe tenerse en cuenta que es este específico caso de reconocimiento de primas y bonificación por servicios, existen varias normas que deben ser interpretadas tal es el caso de la 1042 de 1978, la ley 91 de 1989, 715 del 2001 y la 115 de 1994, que establecen entre otros aspectos las prestaciones sociales de los docentes y a cargo de quien está su pago, entonces atendiendo el mandato del art 53 superior en caso de dudas en la aplicación de normas deberá aplicarse la norma más favorable para el trabajador, en este caso sin hacer más elucubraciones se debe aplicarse irrestrictamente el parágrafo 2 del art. 5 de la ley 91 del 89.

5. PRUEBAS

5.1.DOCUMENTALES.

- 5.1.1. Resolución 2022 de fecha 04 de agosto de 2006: Con este documento se pretende probar el hecho del nombramiento como docente de nivel departamental.
- 5.1.2. Acta de posesión número 2006-9383: Con este documento se pretende probar que la señora Alba Nelly tomó posesión de su cargo como docente en el año 2006.
- 5.1.3. Solicitud de pago de primas de servicios y bonificación por servicios prestados de fecha 08 de septiembre de 2014: Con este documento se pretende probar la petición de pago de las acreencias laborales a la entidad demandada.
- 5.1.4. Acto administrativo contenido en el oficio el COD-080.3.53-011823 de fecha 01 de octubre de 2004: Con este documento se pretende probar la respuesta a la petición elevada por la señora Alba Nelly.



- 5.1.5. Certificado de tiempo de servicio de fecha 31 de enero de 2014: con este documento se pretende probar el tiempo de vinculación como docente del nivel departamental.
- 5.1.6. 3 Certificados de Salarios de la señora Alba Nelly expedidos por la Fiduprevisora: con este documento se pretende probar que la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, no está incluida en los factores salariales, a pesar de la Ley 91/89 así lo establece.
- 5.1.7. Copia de la cedula de ciudadanía de la señora Alba Nelly.
- 5.1.8. Acta de no conciliación de fecha 05 de marzo de 2015.

6. OPORTUNIDAD DE LA ACCION

La acción que se pretende no ha caducado, pues a la fecha de presentación de esta demanda no han transcurrido cuatro (4) meses, teniendo en cuenta que el 01 de octubre de 2014, se notificó el acto administrativo COD-080.3.53-011823 y el 15 de diciembre se presentó solicitud de conciliación, suspendiéndose así los términos de caducidad; por otro lado el 05 de marzo de 2015 se expidió el acta que da cuenta de la imposibilidad del acuerdo conciliatorio, todo lo anterior de conformidad con el art. 138 del C.P.A.C.A.

7. COMPETENCIA Y CUANTIA:

- 7.1. **ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:** Se determinará el monto la cuantía teniendo en cuenta que señora ALBA NELLY SALDARRIAGA solicitó el reconocimiento y pago de la prima de servicios y bonificación por servicios prestados a que tiene derecho, sin que se estableciera suma por estos conceptos, es por ello que se tomara el salario actual del demandante para la determinación de la cuantía.



7.2.**CUANTIA**: se determina para completar los requisitos establecidos en el artículo 157 del C.P.A.C.A. en cuanto al contenido de la demanda es por ello que se establece en la suma de \$1.371.565

7.3.**COMPETENCIA**: De conformidad con el numeral 2do del artículo 155 del C.C.A. corresponde a los Jueces Administrativos conocer en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento, que no excedan de 50 SMLM.

7.4.**COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO**: Esta corresponde a determinar el lugar donde se debe tramitar el proceso, es por ello que de conformidad con el numeral 2 art. 156 del CPACA, corresponde al Juez Administrativo del Circuito de Buga, ya que el último lugar en que el demandante prestó sus servicios en el municipio de Bugalagrande.

8. ANEXOS:

Traslado de la demanda y sus anexos para el Departamento del Valle del Cauca.

Traslado de la demandada y sus anexos para el Ministerio Público

Traslado de la demanda y CD con archivo PDF la Agencia de Defensa Judicial.

9. NOTIFICACIONES:

9.1. LA DEMANDANTE: en la Calle 7N número 5- 11 de Bugalagrande.

9.2. LA ENTIDAD DEMANDADA GOBERNACION : Ubicado en la Plazoleta San Francisco de la ciudad de Cali, correo para notificación judicial: jurídica@valledelcauca.gov.co

9.3.A LA SUSCRITA: En la calle 11 N° 5-54 Edificio Bancolombia. Oficina 511 de Cali, correo para notificaciones judiciales cpazminotorres@gmail.com

9.4. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO: En la calle 70 N° 4-60 Bogotá, correo para notificaciones judiciales procesos@defensajuridica.gov.co



Pazmiño Torres
ASESORES JURÍDICOS

Atentamente,

CAROLINA PAZMIÑO TORRES

C.C.N°34.606.627

T.P.N°113.574 del C.S. de la J.

Calle 11 Número 5-54 Oficina 511
Edificio Bancolombia.
Tel: 8816061
Cali.